



Proceso	Ejecutivo
Demandante	Natalia Quiceno González
Demandado	Integral S.A.
Radicado	05001 31 03 009 2010 00310 03 conexo 05001 34 03 003 0190 03
Instancia	Segunda
Ponente	Juan Carlos Sosa Londoño
Asunto	Auto No.
Decisión	Revoca
Tema	Efectos de la sentencia de excepciones en proceso ejecutivo.
	la sentencia proferida por el Tribunal el día 17 de julio de 2014, sentencia de excepciones en este proceso ejecutivo instaurado en el año 2010 quedó ejecutoriada antes que la proferida en el proceso de conocimiento en todo que tiene que ver con el título ejecutivo, su existencia y validez, es decir, para todos los efectos legales la demandante, Natalia Quiceno González, es legítima titular de las acciones y de los derechos que de ella se derivan, es más la proposición de las excepciones de mérito le impedía a la sociedad instaurar el proceso de conocimiento, y produjo sellamiento de la cuestión juzgada precisamente por no ser sentencia proferida en el proceso susceptible del recurso de casación.

2021-071

TRIBUNAL SUPERIOR

SALA UNITARIA CIVIL DE DECISIÓN

Medellín, veintiséis (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

Procede la Sala a decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante frente al auto del 13 de diciembre de 2019 proferido por el Juzgado

Tercero de Ejecución Civil del Circuito de Medellín, mediante el cual se repuso el proveído del 14 de junio de 2018 y, en su lugar, negó el mandamiento de pago en la acumulación formulada por Natalia Quiceno González en contra de Integral S.A.

## **I. ANTECEDENTES**

1. Ante el Juzgado Tercero de Ejecución Civil del Circuito de Medellín se presentó una quinta demanda de acumulación instaurada por Natalia Quiceno González en contra de la sociedad Integral S.A., la cual fue rechazada de plano por auto del 29 de junio siguiente, debido a su extemporaneidad, por cuanto adujo el juez no se satisfacían las exigencias del numeral 3º del artículo 540 del C. de Procedimiento Civil, esto es, por haberse presentado luego de vencerse los 5 días del emplazamiento previsto en la citada norma.

2. Frente a esa decisión, el apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación manifestando que el emplazamiento y el término previsto en el numeral 3º del artículo 540 ib. tiene por destinatario a los terceros acreedores, dentro de los cuales no está la demandante de quien replica que, por tener dicha calidad, forma parte del proceso, por lo que para ella se utiliza es el término previsto en el inciso primero de dicha disposición legal. Correspondió desatarlo a esta misma Sala de Decisión quien en auto del 19 de septiembre de 2017, revocó, para en su lugar disponer que el juez de primera instancia procediera a librar mandamiento de pago en la forma pedida por el demandante

3. Por auto del 14 de junio de 2018 el *a quo* dictó auto de obediencia a lo dispuesto por el Superior, y libró mandamiento de pago en la forma pedida por la parte ejecutante acumulante. Dicho proveído fue recurrido en reposición por el apoderado de la sociedad demandada argumentando:

“...Falta de legitimación en la causa de la demandante

Al revisar el Libro de Registro de Accionistas de INTEGRAL S.A., - cuya copia autentica de la página respectiva se aporta --, se observa que el 28 de julio del 2010 fue cancelado el registro de la titularidad de la señora NATALIA QUICENO G., sobre las 333.217 acciones (reflejados en los Títulos accionarios nros. 3341 y 3343), cuyos dividendos reclama en esta nueva demanda; cancelación que se hizo con base en la sentencia de la Super Sociedades que declaró la ineficacia de la negociación de acciones entre INTEGRAL Y SERVING. Lo anterior significa que la demandante desde dicha cancelación en el Libro de Accionistas de INTEGRAL S.A. no es la titular de las 333.217 acciones.

La demandante se enteró de la anterior cancelación en el libro de registro de accionistas y le pidió a la Superintendencia de Sociedades que adelantara una investigación administrativa para que sancionara a la sociedad por haber realizado dicha anotación en el libro de accionistas y la obligaran a cancelar dicha anotación (cancelación de la titularidad de las 333.217 acciones de NATALIA QUICENO G), petición que no tuvo éxito ante dicha Superintendencia porque es un efecto necesario de la declaratoria de la ineficacia de la negociación de acciones entre INTEGRAL Y SERVING. Lo anterior significa que la demandante sabe que los títulos 3341 y 3343 que contiene una información sobre su propiedad de 333.217 acciones de INEGRAL S.A. no están vigentes porque fueron cancelados.

Al no existir la prueba legal de la titularidad de las 333.217 acciones (reflejados en los Títulos accionarios nros. 3341 y 3343) la demandante CARECE DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA para reclamar los dividendos sobre esas 333.217 acciones, por NO SER TITULAR DE LAS MISMAS.

Como si lo anterior no bastara, se adelantó un proceso ordinario de doble instancia por INTEGRALS.A. contra NATALIA QUICENO GONZALEZ y SERVING LIMITADA EN LIQUIDACIÓN cuyo objeto (pretensiones) era que se declarara que la negociación celebrada entre SERVING LIMITADA EN LIQUIDACIÓN Y NATALIA QUICENO sobre las 333.217 acciones de INTEGRAL estaban afectadas por la INEFICACIA por lo que dicha negociación carece de efectos jurídicos, en consecuencia, NATALIA

QUICENO no tiene derecho a percibir dividendos generados con base en dichas acciones. Proceso adelantado bajo el radicado 050013103010201100338, en el cual se profirieron sentencias en las dos instancias donde se declaró dicha ineficacia y que la señora NATALIA QUICENO no tenía derecho a los dividendos sobre esas 333.217 acciones.

Debe tenerse muy presente que la sentencia fue DECLARATIVA pues las dos sentencias son muy claras al establecer que acorde con el art.897 del Código de Comercio, los actos ineficaces de pleno derecho no requieren sentencia judicial que los CONSTITUYAN, y que los actos ineficaces de pleno derecho no producen efectos jurídicos frente a NADIE, por eso son ineficaces erga omnes (terceros de toda clase: de mala o buena fe).

COPIO apartes de la sentencia del Tribunal Superior de Medellín:

(...)

*"Cuando se trata como en este asunto de ineficacia de pleno derecho de la negociación por la cual el vendedor que entregó a un tercero se hizo accionista. en razón de lo dispuesto por el artículo 897 el Código de Comercio se entiende que el acto no produjo efectos, lo que implica que el supuesto accionista beneficiario de la suscripción, en este caso Serving Ltda . nunca lo fue. y si transfirió el dominio de lo que no tenía, esta transferencia también surge ineficaz. porque no se dieron tampoco las consecuencias buscadas, que para el adquirente era hacerse propietario, ya que quien dio no tenía lo dado. Luego en este caso debe ser confirmada la sentencia apelada. El acto derivado de uno ineficaz también lo es, pues el primero en ningún caso produjo los efectos Jurídicos buscados por lo que menos los produce el segundo.*

(...)

*Lo anterior puede decirse además de la buena o mala fe que tuviera la accionada, cuestión que tiene relevancia en tanto la negociación hubiera transferido algún dominio, Pero debido a la ineficacia existente, poco importa la posición sicológica de la demandada. De todas maneras, el convenio por el que adquirió no tuvo los efectos buscados, en razón de que el contrato por el cual supuestamente se transfirió el dominio a quien le vendió fue ineficaz de pleno derecho, ya estuviera la adquirente de buena fe.*

*En lo concerniente a la demandada la misma debe devolver los documentos que representan las acciones por ella adquiridas que son objeto de la demanda, dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia...."*

Esa sentencia no está en firme y sus efectos no se pueden hacer cumplir porque la demandante prestó una caución para ello e interpuso el recurso de Casación, el cual aún no se ha decidido. Pero su Despacho debe tener muy presente que, en esa sentencia, El Tribunal de Medellín fue muy claro en afirmar que la ineficacia le era oponible a la señora NATALIA QUICENO, sin importar si estaba de buena o mal fe, y que ella no tenía derecho a los

dividendos sobre esas 333.217 acciones y que debe devolver esos títulos accionarios.

COROLARIO 1. Se allegó al proceso documentos que prestan mérito ejecutivo respecto de los ACCIONISTAS de INTEGRAL y respecto de los dividendos que se ordenaron pagar con base en las ACCIONES y sus titulares que figuran en el Libro de Accionistas de INTEGRAL S.A.

COROLARIO 2. Se allegó el TITULO EJECUTIVO por una persona que NO ES ACREEDORA por NO SER LA TITULAR de las 333.217 acciones de INTEGRAL, pues esa titularidad junto con la Vigencia de los Certificado de Acciones nros 3341 y 3343 fueron cancelados en el libro de Accionistas desde el 28 de julio de 2010, y la demandante lo sabe, razón por la cual su conducta es temeraria (art. 79 males 1 y 2 CGP). Es más, según la Sentencia del Tribunal superior de Medellín la señora NATALIA QUICENO debe devolver esos títulos accionarios

Será que, si la demandante allegara un cheque girado por INTEGRAL a favor de PEDRO PEREZ, como su actual y único tenedor, lo podría cobrar? ¿Estaría legitimada ella para cobrarlo a título personal ese título ejecutivo? Claro que no... no estaría legitimada para hacerlo.

DEBER DE PROFERIR SENTENCIA ANTICIPADA.

El artículo 278 nral 3 del CGP, establece el deber del juez de proferir sentencia anticipada en cualquier etapa del proceso - aquí es obvio que ya hay proceso - en unas hipótesis legales, entre las cuales está la falta de legitimación en la Causa..."

**4.** Por auto del 13 de diciembre de 2019 se repuso la providencia del 14 de junio de 2018 y en su lugar se negó el mandamiento de pago, indicando que:

"....Sobre el particular, resulta trascendental la Sentencia 3201 del 9 de agosto de 2018, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso ordinario con radicado 05001 31 03 010 2011 00338 01, promovido por IN.TEGRAL S.A. en contra de SERVING LTDA. y NATALIA QUICENO GONZALEZ, con la cual quedó en firme la decisión de primera instancia que declaró la ineficacia de la adquisición de 333.217 acciones pertenecientes a INTEGRAL S.A., por parte de la señora NATALIA QUICENO GONZALEZ, según la transferencia que de las mismas le hizo SERVING LIMITADA EN LIQUIDACION (fls. 270 a 271, radicado 05001 34 03 701 2015 00019 00).

No obstante lo anterior, en criterio de la Corporación, los efectos de la declaración judicial de ineficacia del negocio de venta de acciones entre INTEGRAL S.A. y SERVING LTDA. se le comunican a la señora NATALIA QUICENO, quien está obligada a restituirlas a su verdadero propietario, INTEGRAL S.A., dado que encontró pruebas suficientes que demostraban su mala fe, verbi gratia, el precio ínfimo que pagó por las acciones, el acceso que tenía la señora Quiceno González a los estados financieros de Integral S.A. y a la información sobre el valor de las acciones en razón del cargo de dirección y confianza que detentaba en la Compañía, su amistad íntima con el Presidente de la sociedad demandante, lo cual indicaba que "fue este o un familiar" quien había pagado el precio de las acciones, además de su negociación clandestina

De otra parte, se pone de relieve que la sentencia de segunda instancia del 17 de julio de 2014, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín dentro del presente proceso ejecutivo, radicado con el número 05001 31 03 009 2010 00317 01 (demanda principal), no es la llamada a regir el caso, atendiendo a que fue la sentencia de la Corte Suprema de Justicia precitada, la providencia que en virtud de proceso ordinario, con integración plena del contradictorio (Integral S.A., SERVING LTDA. EN LIQUIDACION y NATALIA QUICENO GONZALEZ), definió sobre la relación sustancial que subyacía a los aparentes títulos ejecutivos aquí invocados.

Así las cosas, resulta claro para esta judicatura que los documentos aportados con la demanda de acumulación examinada no configuran un título ejecutivo, dado que no es plausible reclamar dividendos respecto acciones que no nacieron a la vida jurídica, atendiendo a la ineficacia del acto jurídico por medio del cual la ejecutante las había adquirido.”

**5. Frente a esa decisión el mandatario judicial de la parte demandante interpuso recurso de apelación, cuyos apartes pertinentes se transcriben a continuación:**

“...El reparo concreto y la sustentación.

El a quo, en la providencia que se apela, incurrió en un error de derecho que...(consiste) en desatender lo decidido en una sentencia que producía efectos de cosa juzgada entre las partes del proceso. Sentencia está en la cual ya se había resuelto -aunque en sentido contrario a lo que resolvió este despacho el 13 de diciembre- el litigio relativo a existencia (o no) del título ejecutivo.

Me refiero, desde luego, al fallo del día 17 de julio de 2014 de la Sala Tercera Civil de Decisión del H. Tribunal Superior de Medellín, a través de la cual esta decidió

revocar la sentencia, que vía apelación se conoce, para en lugar **declarar no prospera la excepción de inexistencia de título ejecutivo propuesta por la entidad demandada, y ordenar continuar la ejecución en favor de Natalia Quiceno González y en contra de la sociedad Integral S.A. por la suma de TRESCIEN- TOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M.L. (\$349.433.560.00)(... )** (Subrayas y negrillas propias)

Las providencias mediante las cuales se resuelven las excepciones de mérito formuladas en un proceso ejecutivo --como lo es la recién citada- son auténticas sentencias, pues ellas resuelven un verdadero litigio que se presenta entre las partes. Como sentencias que son, el ordenamiento jurídico las dota de un atributo de estabilidad del que no goza ningún otro proveído dentro del sistema: la cosa juzgada. Así lo establece el artículo 443 del Código General del Proceso:

Artículo 443. Tramite de las excepciones. El trámite de excepciones se sujetará a las siguientes reglas:

(...) 5. La sentencia que resuelva las excepciones hace tránsito a cosa juzgada (... )

Cuando una providencia alcanza ese atributo, bien se sabe, se toma definitiva entre las partes, lo que, en términos algo escuetos, significa que no puede producirse dentro del ordenamiento otra sentencia que la contrarie.

Ahora bien, en esa sentencia (que recién referencié), como se ve, se decidió (en forma definitiva por virtud, precisamente, de los efectos de la cosa juzgada) que el título con base en el cual la ejecutante promovió la totalidad de los procesos ejecutivos de los que conoce el a quo existía. Y, como consecuencia de ello, ese aspecto (el de la existencia del título) no admite una nueva discusión.

¿Por qué?, entonces, ¿el despacho desatendió lo que ya había sido resuelto? Por una razón equivocada: porque consideró que la sentencia que se produjo dentro del proceso ordinario con radicado 05001-31-03-010-2011-00338-01 era la que habría de gobernar el litigio relativo a la existencia del título ejecutivo. Esa consideración que fue la que fundamentó la providencia que se apela- es errada por una sencilla (pero poderosa) razón: porque esa sentencia alcanzó su ejecutoria en un momento posterior al momento en el cual la adquirió el fallo proferido el día 17 de julio de 2014. En efecto, este último, por virtud de lo previsto 331 del Código de Procedimiento Civil y el 302 del Código General del Proceso, adquirió firmeza el día 1 de agosto de 2014, mientras que el primero -por virtud de lo previsto en esos mismos artículos- únicamente la adquirió en el año 2018, una vez resuelto el recurso extra- ordinario de casación.

*Esto de la ejecutoria viene a cuento porque el atributo de la cosa juzgada solo se produce una vez se alcance aquella:*

*Artículo 303 del CGP. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes (...)*

*De lo que se sigue que solo una de las dos sentencias en conflicto (la del ejecutivo y la del proceso ordinario) está contraviniendo otra que hizo tránsito a cosa juzgada: la que se produjo en el proceso ordinario, pues-y en esto no puedo insistir lo suficiente la que se produjo en el proceso ejecutivo alcanzó ejecutoria (y, así, hizo tránsito cosa juzgada) en un momento muy anterior (año 2014).*

*En síntesis, entonces, el a quo erró al aplicar -para decidir lo relativo a la excepción de «inexistencia de título ejecutivo»- la sentencia que se produjo dentro del proceso ordinario con radicado 05001-31-03-010-2011-00338-00, pues debió aplicar para ese mismo efecto-- la sentencia que adquirió ejecutoria con anterioridad, que lo fue la producida dentro del proceso ejecutivo con radicado 5001310300920100031700....*

## **II. CONSIDERACIONES**

1. La discusión que ahora se presenta es la misma que originó mi salvamento de voto Nro. 5 a la sentencia del día 23 de abril de 2019 con ponencia de la Dra. Piedad Cecilia Vélez Gaviria en el proceso ejecutivo que entre las mismas parte se tramitaba en el Juzgado Veintidós Civil del Circuito de esta ciudad, rdo. 05001 321 03 015 2012 00449 01 y puesto que la mayoría de la Sala consideró al igual que la a quo que la sentencia proferida por la sala de Casación civil en el proceso ordinario impedía continuar con la ejecución, argumentos que reitero en esta oportunidad, así:

2. En el año 2010 Natalia Quiceno González promovió proceso este proceso ejecutivo singular contra la sociedad Integral S.A,



con el fin de obtener el pago de los dividendos que debieron pagarse en el año 2009, en tanto, la Asamblea General de Accionistas había dispuesto el pago de los dividendos en tres instalamentos, habiéndose pagado totalmente el primero, y parcialmente el segundo (Rdo. 05001 31 03 09 2010 00317 01).

En sentencia del 28 de septiembre de 2012 proferida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Descongestión de Medellín, se declaró probada la excepción denominada inexistencia de título propuesta por el ejecutado, y en consecuencia dispuso cesar la ejecución en contra de la sociedad demandada.

El recurso fue resuelto por el Tribunal, con ponencia del suscrito en providencia del 11 de febrero del 2014 revocando la decisión apelada y ordenando continuar la ejecución, decisión que fue anulada en virtud de lo dispuesto por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en providencia del 13 de junio de 2014, que otorgó amparo a la sociedad demandada.

Fue entonces cuando, en acatamiento de la orden del juez constitucional, el Tribunal profiere sentencia el día 17 de julio de 2014, en la que se dijo con relación al comportamiento de la ejecutada una vez había sido notificada de la orden de apremio que:

*“De manera oportuna se pronunció la sociedad demandada aceptando como cierto unos hechos, y negando otros, oponiéndose a las pretensiones de la demanda indicando que no existe título ejecutivo para la presente demanda, dado que la transacción por la cual la demandante pretende cobrar los dividendos, emana de una transacción viciada de ineficacia, en los términos del artículo 897 del*

*Código de Comercio, y respecto del cual afirma existe sentencia ejecutoriada que hizo tránsito a cosa juzgada, proferida por el Superintendente de Sociedades, en julio 9 de 2010, mediante la cual se declaró la ineficacia de la operación, en virtud de la cual el cedente de las acciones de la demandante, adquirió dichas acciones, proceso en el cual por lo demás, el apoderado de la demandante se hizo parte en representación de una persona vinculada a la demandante.*

*Relata además, dicho mandatario judicial, que a diferencia de una nulidad absoluta, la ineficacia opera de pleno derecho, sin necesidad de una sentencia que así lo declare, por tanto, al no producir ningún efecto, quien pretende ser adquirente, la hoy demandante, carece de todo derecho, por lo que presumiéndose que obró de buena fe, procede simplemente a su favor la devolución de lo que entregó como supuesto pago del precio de las acciones. Propone como medio exceptivo, inexistencia de título ejecutivo, argumentando que hay claridad que hubo una operación ilícita por la parte demandante, y que tal ilicitud se sanciona por expresa disposición legal con la ineficacia, sanción de la que afirma no requiere ser declarada judicialmente...”*

La decisión del Tribunal quedó plasmada en los siguientes términos:

*“...**REVOCA** la sentencia, que vía apelación se conoce, para en su lugar declarar no próspera la excepción de inexistencia de título ejecutivo propuesta por la entidad demandada, y ordenar continuar la ejecución en favor de Natalia Quiceno González y en contra de la sociedad Integral S.A. por la suma de **TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M.L. (\$349.433.560.00)** , desglosados así: **a)** CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS (\$174'716.780), como capital, más los intereses de mora liquidados a la tasa máxima legal permitida, a partir del 16 de diciembre de 2009. **b)** CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS (\$174'716.780), como capital, más los intereses de mora liquidados a la tasa máxima legal permitida, a partir del 16 de diciembre de 2009...”*

3. Los mismos hechos fundantes de las excepciones de mérito fueron esgrimidos en el año 2011, por la sociedad Integral S.A. en proceso de conocimiento instaurado contra Servicios de Ingeniera

Serving Limitada y Natalia Quiceno González (radicado 05001 31 03 010 2011 00338 01), esto es, para que se reconociera los efectos de la ineficacia de la venta de 333.217 acciones que Serving Limitada hizo a la última y la devolución de dividendos producidos por esas acciones, además de intereses corrientes y moratorios que se le pagaron a la adquirente sin tener derechos a ellos. Subsidiariamente pretendió la declaración de inexistencia del mencionado contrato, en virtud de lo señalado en el artículo 1870 del Código de Comercio

4. En el año 2012 Natalia Quiceno González promovió el proceso ejecutivo en el que plasmé mi salvamento de voto para obtener el pago de los dividendos aprobados por la Asamblea General de Accionistas de Integral S.A. el 30 de abril de 2010 en el que el apoderado judicial de Integral informó que mediante sentencia del 17 de octubre de 2013 el Tribunal había confirmado la dictada por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Descongestión el 17 de mayo del mismo año, en la que declaró que la adquisición de las acciones fue ineficaz.

5. Sin embargo, como la sentencia del tribunal fue objeto del recurso extraordinario de casación, no quedó ejecutoriada en el año 2013. En la sentencia SC-2776 de 2018, la Corte precisó ampliamente cuándo, bajo la vigencia del C. de Procedimiento Civil quedaban ejecutoriada la sentencia (sic) de jueces y tribunales, he aquí lo pertinente:

**“3. La ejecutoria de la sentencia.**

Tradicionalmente se ha entendido que la sentencia se encuentra ejecutoriada cuando se hubiere proferido en procesos de única instancia, o cuando no sea viable la interposición de algún recurso, o cuando, resultando procedente la impugnación, ésta no se hubiese presentado, o cuando la presentada se hubiera resuelto, aunque vale la pena agregar que cuando se hace referencia a la posibilidad de abrir paso a una segunda instancia, debe incluirse la consulta, desde luego en la medida que ese grado jurisdiccional aplique en la situación concreta, lo cual es cada vez más reducido.

Ahora, cuando se trata de la ejecutoria de providencias de segundo grado, es claro que de no proceder más recursos, su ejecutoria se predica una vez notificado el proveído y finiquitado el término previsto en la norma, que puede ser usado, valga recordarlo, para solicitar la corrección, la aclaración o la complementación del veredicto, caso en el cual la ejecutoria aplica una vez emitida la decisión correspondiente.

**En todo caso, no sobra mencionar que el evento de procedencia de una impugnación, no propuesta o ya resuelta, hace referencia a los recursos ordinarios e incluso también a la casación; pues, si bien, los recursos extraordinarios teóricamente proceden contra sentencias ejecutoriadas, como regla general, el recurso de casación, de proceder, normativamente no se circunscribe al ataque de sentencias ejecutoriadas, cual brota de consultar el derogado artículo 366 del Código de Procedimiento Civil e igualmente el 334 del Código General del Proceso. De ese modo, la ejecutoria se presentaría cuando no procede la casación o cuando, de proceder, no se interpone o se resuelve.** – resaltos intencionales-

El artículo 331 del Código de procedimiento Civil, vigente para cuando se profirió la sentencia recurrida, disponía *«las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva»*.

De lo anterior se desprende que la ejecutoria de una decisión emitida en vigencia del C. de P. Civil podía presentarse en el acto de su notificación, cuando carecía de recursos, a menos que oportunamente se hubiera solicitado su aclaración o adición, evento en el cual, la indicada figura jurídica se extendería hasta el momento en que la providencia resolutoria de la respectiva petición, cobrara firmeza.

Ahora, si la determinación admitía impugnaciones, con base en la indicada disposición legal, se reitera, su ejecutoria se producía cuando *«h[ubier]an vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda[ra] ejecutoriada la providencia que res[olviera] los interpuestos»*.

Esta Corporación, respecto del tema que se viene comentando, en providencia CSJ AC 31 jul. 2007, rad. 2006-01218-00, precisó:

*«[D]e lo previsto en el artículo 331 del mismo código se infiere cómo los recursos que tienen la virtualidad de prolongar el término de ejecutoria de las providencias judiciales son únicamente los que fueren procedentes, de modo que si, de entrada, o a posteriori, se concluye que no lo eran, la firmeza de dichos pronunciamientos se retrotrae al momento del vencimiento de los tres días siguientes a su notificación o al del señalado para la interposición de los que fueren procedentes, pues ‘si determinado recurso no era procedente, es de entender que jamás se interpuso’ (...).»*

Lo expuesto permite concluir que si la decisión no admitía recursos, o los mismos no se formularon oportunamente, el término de ejecutoria se consolidaba vencidos los tres días siguientes a la notificación de la providencia, o transcurrido el término señalado para la formulación de los recursos procedentes, sin que se requiriera su declaratoria.

Luego, si como antes se expuso, oportunamente se impetró su aclaración o adición y la audiencia no se prosiguió en la misma fecha de emisión de la providencia, la firmeza de ésta *«solo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva»*<sup>1</sup>.

Falta decir que lo consagrado en el artículo 331 del C. de P. Civil aplicaba, sin duda alguna, en los procesos escriturales, que eran los mayoritarios en dicha normativa. Sin embargo, cuando la sentencia se dictaba en audiencia, el término de tres días, previsto en esa norma no era aplicable porque si ese plazo tenía por finalidad la de interponer recursos o, previo a ello, pedir aclaración complementación o corrección del fallo, es claro que la estructura de la audiencia obligaba que tales actividades se desarrollaran allí, de tal suerte que, terminada sin que se hubieran interpuesto recursos o cuando estos no procedían, la sentencia se entendía ejecutoriada, con una excepción, consistente en la procedencia del recurso de casación, para cuya formulación el precepto 369 del C. de P. Civil contemplaba un permiso de cinco días, siguientes a la misma diligencia, en la cual, la sentencia se notificaba por estrados, no personalmente.

---

<sup>1</sup> Parte final inciso 1º, artículo 331 C. de P.C.

6. El anterior prolegómeno jurisprudencial para reiterar que la sentencia proferida por el Tribunal el día 17 de julio de 2014, sentencia de excepciones en este proceso ejecutivo instaurado en el año 2010 quedó ejecutoriada antes que la proferida en el proceso de conocimiento en todo que tiene que ver con el título ejecutivo, su existencia y validez, es decir, para todos los efectos legales la demandante, Natalia Quiceno González, es legítima titular de las acciones y de los derechos que de ella se derivan, es más la proposición de las excepciones de mérito le impedía a la sociedad instaurar el proceso de conocimiento, y produjo sellamiento de la cuestión juzgada precisamente por no ser sentencia proferida en el proceso susceptible del recurso de casación.

7. En efecto, en sentencia SC15214 de septiembre 26 de -2017 Radicación n° 11001-31-03-001-2009-00479-0, La Corte expresó:

“Conforme al aludido canon 332, la sentencia ejecutoriada proferida en un juicio contencioso surte efectos de cosa juzgada cuando, al contrastarla con un nuevo rito judicial, ambos versan sobre el mismo objeto, tienen como base idéntica causa y los sujetos enfrentados coinciden en uno y otro litigio.

Ese instituto tiende a proteger la inmutabilidad de los fallos judiciales, evitando que la discusión dirimida sea objeto de nuevo pronunciamiento, lo que de paso genera seguridad y estabilidad jurídica.

En tal orden de ideas, como regla de principio, si la triple identidad aludida se configura, la jurisdicción del Estado fue agotada y, por sustracción de materia, nada tiene que decidir en el segundo pleito.

Esa pauta de derecho se ve transgredida cuando el juez, en palabras de la Corte, *«(...) al estudiar sobre el objeto de la demanda, contradice una decisión anterior, estimando un derecho negado o desestimando*

*un derecho afirmado por la decisión precedente (...).» (SC de 12 ag. 2003, rad. 7325, SC 5 jul. 2005, rad. 01493).*

“ ...

4.- No obstante que las precedentes consideraciones bastan para descartar el cargo bajo estudio, para abundar en razones, la Corte anota que, como ha tenido oportunidad de precisarlo, en los procesos ejecutivos existe una etapa prevista para que el deudor, si a bien lo tiene, **cuestione el desenvolvimiento contractual génesis del título ejecutivo, entre otros aspectos, a través de la proposición de excepciones perentorias.** – resaltos intencionales -

Se trata de la ocasión propicia para que, el deudor ejerza su derecho a la defensa -en desarrollo a la garantía fundamental del debido proceso-, prevalido de todas las herramientas que el ordenamiento jurídico le brinda. Por supuesto que sería un despropósito dejarlo desprovisto de ese escenario, tan sólo porque suscribió un documento que da cuenta de la prestación ejecutada.

**Pero tampoco es de recibo que al margen de ese procedimiento, el deudor con posterioridad instaure otro de naturaleza declarativa para esgrimir los mismos argumentos que forjó en su defensa con el fin de desvirtuar la obligación ejecutada, pretendiendo de tal manera apartarse del debate propuesto en el cobro compulsivo e, incluso, de la sentencia que lo dirimió, si ésta ya fue dictada.** – los resaltos no son del texto -

Este último proceder riñe con el deber de lealtad que los litigantes deben conservar en relación con su contendor, así como frente a la administración de justicia (art. 71, num. 1º C.P.C.), porque de lo contrario se otorgaría a los ciudadanos la facultad para replantear un litigio un sin número de veces, hasta tanto obtengan una decisión que los promulgue vencedores.

De ahí que, teniendo como mira el que los operadores de justicia no emitan distintas providencias para el mismo conflicto en orden a evitar fallos, contradictorios, han sido creados diversos mecanismos como la excepción previa de pleito pendiente, la mixta de cosa juzgada -que en el Código General del Proceso mutó a meritoria-, la suspensión del proceso por prejudicialidad (art. 170), el recurso extraordinario de revisión (causal 9ª del art. 380), etc.; lo que adicionalmente sobrepone el principio de economía procesal por encima de los intereses de las partes.

Efectivamente, sobre el punto la Sala indicó que:

(...) deviene inexorablemente la preclusión contra el ejecutado, impidiéndole invocar después en un proceso ordinario hechos que se hubieran podido alegar como tales excepciones en el trámite de la ejecución; si así no fuera, el proceso ejecutivo como instrumento auxiliar para hacer efectivo el pago de las obligaciones perdería su razón de ser, amén de que quedaría al talante del ejecutado optar por acudir allí a oponerse al cobro judicial; o guardar silencio, cualquiera fuera el motivo que hubiera inspirado su omisión, y dejar para ir después a la vía ordinaria a exponer sus defensas, proceder éste que no solo atentaría contra la seguridad jurídica y la lealtad procesal, sino que le otorgaría a la ejecución coactiva judicial un carácter meramente provisional, lo que, ni por asomo, permite la ley. (SC 10 sep. 2001 rad. 6771).

Y reiterando esa doctrina la Corte señaló que:

No está demás señalar que de conformidad con el artículo 512 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia que resuelve las excepciones de mérito en el proceso ejecutivo hace tránsito a cosa juzgada, imperativo del cual no puede escapar el demandado con sólo dejar de proponer la excepción o haciéndolo de manera abstracta aludiendo a cualquier motivo enervante de la pretensión. El silencio del demandado sobre un medio de defensa que a su haber tenía contra el título ejecutivo, no puede quedar impune, ni deja abierta la jurisdicción para que dicha excepción sea discutida mediante proceso ordinario, pues darle tal valor al mutismo del ejecutado no sólo desconoce el alcance del artículo 512 del Código de Procedimiento Civil, sino que se erige en premio para la conducta omisa del demandado, la que podría afectar la lealtad procesal debida, a la par que colocaría en un ámbito bastante relativo la cosa juzgada. **El tránsito de un negocio jurídico por el proceso de ejecución, en línea de principio, depura definitivamente la relación sustancial, porque nada justificaría que el deudor callara una excepción para luego poner en disputa el valor de la cosa juzgada y la seguridad jurídica que ella depara a las partes y a terceros.** (SC 352 de 2005, rad. 1994-12835).

Así mismo, en otro pronunciamiento sentó:

En efecto, la evolución legislativa en Colombia, el estudio armónico de las instituciones del proceso, y la jurisprudencia de la Corte, permiten afirmar, en línea de principio, que el deudor debe proponer en el proceso ejecutivo todas las excepciones que pueda tener contra el título ejecutivo. **Razones de lealtad, de economía procesal, pero fundamentalmente de seguridad jurídica, claman porque los reparos sobre la validez de un acto generador de obligaciones no sean resueltos por jueces distintos en escenarios procesales diferentes. Así, los institutos de la cosa juzgada, la suspensión por prejudicialidad y el pleito pendiente, vienen a ser el conjunto de instrumentos que la ley procesal ha establecido para garantizar que de una sola vez se ponga fin a la incertidumbre que se cierne sobre un contrato, pues si varios jueces de la misma jerarquía son puestos en la posibilidad de emitir dictámenes contradictorios al**



respecto, en este caso acerca de la validez del título hipotecario, el Derecho como herramienta social habrá perdido la función estabilizadora que está llamado a cumplir.

(...)

La razón de los anteriores precedentes está justificada también en que la fase de conocimiento dentro del proceso ejecutivo, por su amplitud e importancia en la definición de las relaciones jurídicas, excluye el aplazamiento del debate sobre la validez y los efectos del título ejecutivo presentado por el acreedor, de modo que tales materias quedan en principio reservadas al juez de la ejecución. (SC 019 de 2007, rad.1998-00339)". –todos los resaltos son intencionales-

8. Luego, nuevamente se considera que, si alguna providencia tenía, tiene, incidencia en este proceso ejecutivo no es, la proferida en el proceso de conocimiento (radicado 05001 31 03 010 2011 00338 01), sino la del día 17 de julio de 2014 proferida por la Sala Civil en el proceso ejecutivo al que correspondió el radicado 05001 31 03 09 2010 00317 01, y de la cual fui ponente por lo que se debe revocar el auto recurrido.

### III. DECISION

Por lo expuesto el Tribunal Superior de Medellín en Sala Unitaria Civil de Decisión, **REVOCA** el auto de fecha y naturaleza indicada en la parte motiva de esta providencia, para en su lugar disponer que el juez de primera instancia proceda a librar mandamiento de pago en la forma pedida por el demandante.

### NOTIFIQUESE

**JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO**  
**Magistrado**

**Firmado Por:**

**Juan Carlos Sosa Londono  
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional  
Sala 001 Civil  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**9c541c1b8e5ab7052d25692540a06714d9338f8f933f1f94b7c6d46c8510708b**

Documento generado en 30/11/2021 09:00:54 AM

**Valide este documento electrónico en la siguiente URL:**

**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**